



CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y
POLÍTICA SOCIAL

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

ORDEN

NÚMERO 1942/2023

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Exp.:020/2020

Unidad Administrativa
DIVISIÓN DE
CONTRATACIÓN

Examinadas las actuaciones practicadas y documentos obrantes en el expediente de determinación de responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Pliego de Prescripciones del contrato de referencia, procede resolver teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por orden nº 1929/2019 de 19 de noviembre, de la entonces Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, le fue adjudicado a la entidad ARALIA Servicios Sociosanitarios, S.A. (A47326475), el contrato titulado "Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia y Centro De Día) Peñuelas, de Madrid"

En el citado contrato la entidad se compromete a llevar a cabo la gestión del centro de atención a personas mayores dependientes residencia Peñuelas, ubicado en Madrid, C/ Arganda, 9 y 11, con estricta sujeción a lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas.

El contrato tiene una vigencia de tres años, desde el 30 de enero de 2020 hasta el 29 de enero de 2023 que ha sido prorrogado mediante Orden 2671/2022 de 24 de noviembre de 2022 de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social desde el día 30 de enero de 2023 hasta la formalización del nuevo contrato derivado de la licitación que se tramita en la actualidad, sin que, en ningún caso, la prórroga pueda exceder del 29 de abril de 2023.

SEGUNDO.- A lo largo del miércoles, 12 de abril de 2023, se tiene conocimiento en la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, por información ajena al centro, del fallecimiento de una usuaria de la Residencia de Peñuelas, debido presuntamente a un estrangulamiento provocado por una sujeción física.

TERCERO.- Ante la falta de información de este hecho por parte del centro, desde la Subdirección General de Centros y Servicios, mediante correo electrónico de 12 de abril, a las 23.11 hs., se solicita que, antes de las 8 de la mañana, se remita un informe detallado de lo que sucedió acompañado del registro de sujeción y de la prescripción médica. Así mismo se recuerda la obligación de comunicar de forma inmediata a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia las incidencias significativas que se produzcan, entre las que se encuentra la presunta muerte violenta de un residente.

CUARTO.- Con fecha 13 de abril a las 8.39 hs., mediante correo electrónico, se recibe respuesta por parte de personal responsable de la entidad Aralia Servicios Socio Sanitarios en el entienden que dicha muerte no encaja en ninguno de los supuestos de información obligatoria e informan de que están trabajando en la realización de un informe sobre los hechos ocurridos. Por parte de la subdirección General de Centros y Servicios, se le envía copia de la circular de incidencias que se remitió a todos los centros, entendiendo que lo sucedido entra dentro de los supuestos que se deben comunicar inmediatamente.

QUINTO: En esa misma fecha, 13 de abril a las 11:53 horas, así como al día siguiente, 14 de abril a las 10:54 horas, se reciben en la Subdirección General de Centros y Servicios de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia dos nuevos correos electrónicos de la entidad, en el que se adjunta sendos informes del director del centro sobre los hechos ocurridos la noche del martes 11 de abril de 2023. En dichos informes el director relata los antecedentes y los hechos ocurridos en relación con el fallecimiento de la residente que, en síntesis, son los siguientes:

"En la noche del pasado martes, 11 de abril del 2023 fallece Dña. PCG a las 6:10 horas.

Me llaman a las 6:20 h., preguntándome como debían de actuar al ser un caso especial de fallecimiento. Les comento que debe valorarla primero la doctora del turno de la mañana.

La doctora del turno de la mañana al llegar sube inmediatamente a la habitación de la residente. A continuación, indico el juicio clínico emitido por la médico: "Encuentro a la residente en la cama, con ausencia de signos vitales (pulso, tensión arterial y ruidos respiratorios), sin reflejos pupilares, al momento de la exploración mantiene algo de tono muscular. Luego de valorarla me comunico con las auxiliares para saber que había pasado e informo de los hechos a su hijo Alfonso por vía telefónica".

Nos reunimos (la doctora y yo) con las auxiliares del turno de noche, quienes comentan que cuando fueron a la segunda ronda (3:20 horas) la encontraron con la cabeza en la mitad de la cama y la sujeción al lado del cuello. En ese momento la residente se encontraba en condiciones estables y consciente, la reincorporaron y acoplaron a la cama. Más tarde, en la tercera ronda (6:10 horas) se la encontraron con la sujeción abdominal cruzada debajo del miembro superior derecho (el brazo) hasta el cuello y el hombro izquierdo, quedando totalmente atrapada, presentaba coloración amarillenta de la piel y ya no respiraba, al encontrarla así le liberaron de la sujeción.

Luego de la valoración física y de recoger la información de lo sucedido, la médico llama al centro de salud para comunicarse con la médico de cabecera y solicitar su valoración y realización de electrocardiograma y de esta forma confirmar el fallecimiento. Sin embargo, la médico de cabecera nos comenta que no es necesario realizar electrocardiograma para confirmar el fallecimiento. Ya que se sospecha que la causa de muerte ha sido debido a probable asfixia por uso de sujeción, se activa protocolo por este tipo de fallecimientos informándose a juez y policía no encontrando estos nada relevante."

SEXTO.- Del análisis de los hechos señalados en los puntos anteriores se confirma que la incidencia relatada en el apartado segundo se produjo el martes 11 de abril de 2023 a las 6:10 horas, sin que en ningún momento a lo largo de ese día el centro informara de este hecho a la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, tal y como se recoge en el apartado XIV del PPT que rige el contrato en la forma establecidas en las circulares emitidas por la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia con fechas 13 de mayo de 2016 y 1 de febrero de 2017.

SEPTIMO.- A la vista de lo anterior, con fecha 19 de abril de 2023, la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, comunicó a la entidad, a los efectos del trámite de audiencia y alegaciones, la siguiente propuesta de imposición de penalidades:

"La tipificación de los hechos descritos en los antecedentes de hecho, como incumplimiento de la obligación contractual descrita en el apartado B2.3 de la cláusula primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato. Atendiendo al criterio de graduación señalados, se propone una penalidad de 24.851,66 euros, como resultado de los siguientes cálculos: 0,6% x 4.141.942,63€ (Precio anual de adjudicación, sin IVA)"

En dicha comunicación se concede a la entidad 10 días para efectuar las alegaciones que tenga por convenientes.

OCTAVO.- Con fecha 2 de mayo de 2023 la entidad presenta escrito de alegaciones solicitando dejar

sin efecto la penalidad propuesta

NOVENO.- La Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, con fecha 17 de mayo de 2023, elevó al órgano de contratación una propuesta de imposición de penalidades por importe de 24.851,66 euros, derivados del incumplimiento citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen el contrato, en su apartado XIV. "Coordinación, control, supervisión e información en la prestación del servicio y otras obligaciones del adjudicatario", señala lo siguiente:

"[...]"

2. El adjudicatario viene obligado a informar a la Consejería, a través del responsable citado en el punto anterior, en el mismo día en que se produzca, sobre cualquier incidencia significativa que surja en el desarrollo de la prestación del servicio y a facilitar puntualmente cuanta información le sea requerida en relación con la misma.

SEGUNDO.- El apartado 20.B de la cláusula primera del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el contrato, establece, entre otras, las siguientes penalidades por ejecución defectuosa del contrato:

"B.2. Graves: Se podrá imponer una penalidad de hasta el 1% del precio anual de Adjudicación del contrato en los siguientes casos:

"[...]"

B.2.3. Por la ocultación o falta de comunicación a la Consejería competente en materia de servicios sociales de hechos relevantes que afecten a los usuarios o a la prestación del servicio.

"[...]"

TERCERO.- Entrando en el estudio de las alegaciones efectuadas por la entidad, hay que señalar que las mismas no desvirtúan los hechos objeto de imposición de penalidad ni su cuantía.

La entidad alega los motivos por lo que, a su entender, los hechos no suponían una incidencia significativa y con trascendencia suficiente para su comunicación inmediata y, por tanto, no suponen un cumplimiento defectuoso del contrato. En su opinión no cabe calificar el fallecimiento de la residente como "muerte violenta" o "asfixia por sujeción", ya que el fallecimiento no tiene un diagnóstico certero, por lo que no se encuentra incluido dentro del ámbito de aplicación del apartado XIV del PPT.

No obstante, esta afirmación se contradice con la mera lectura de los hechos que el propio centro comunicó a esta Dirección General dos días después de que hubieran sucedido. En dicha comunicación se relatan las circunstancias en la que se produjo el fallecimiento de una usuaria que fue encontrada a las 6:10 horas del 11 de abril de 2023, por el personal auxiliar "con la sujeción abdominal cruzada debajo del brazo hasta el cuello y el hombro izquierdo, quedando atrapada. En este momento la residente presentaba coloración amarillenta y ya no respiraba, motivo por el que rápidamente le liberaron de la sujeción."

Por otro lado, según lo relatado en su informe, el propio centro decide, ante la situación planteada, poner en marcha el protocolo de "fallecimientos especiales" y dar aviso de lo sucedido tanto a la policía como al juzgado de guardia. Hay que recordar en este punto que, ya la propia circular de 13 de mayo de 2016 aludida en los antecedentes de hecho, especifica, entre las situaciones en las que se contempla la comunicación inmediata por parte del centro, la "presunta muerte violenta de un residente", más allá de la determinación en su momento de la causa final del fallecimiento.

Finalmente, alega la entidad que siempre ha mantenido una colaboración activa con la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, al igual que en el hecho que aquí acontece; no

obstante, en este punto el Pliego de Prescripciones Técnicas es claro al afirmar que el/la Director/a está obligado a informar en el mismo día en que se produzca, sobre cualquier incidencia significativa que surja en el desarrollo de la prestación del servicio, independientemente de que, con posterioridad, se puedan continuar las actuaciones tendentes a aclarar las circunstancias que dieron lugar a los hechos, sus causas o sus consecuencias.

CUARTO: Una vez rebatidas las alegaciones formuladas por la empresa contratista y constatado que la misma no aporta ningún dato que desvirtúe el incumplimiento detectado, procede mantener el importe de la penalidad en la cantidad establecida en la comunicación realizada a la empresa contratista en fecha 19 de abril de 2023 por la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, y que se reproduce en el punto SEPTIMO de los Antecedentes de Hecho de esta Orden.

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con la propuesta de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, en aplicación del art. 192.1 de la LCSP, el apartado VII del Pliego de prescripciones técnicas y de la cláusula segunda del documento de formalización del contrato de referencia.

DISPONGO

Imponer a la entidad **ARALIA Servicios Sociosanitarios, S.A.** (A47326475) una penalidad por importe de **VEINTICUATRO MIL OCHOIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS** (24.851,66 euros) por el incumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas y el documento de formalización que rige el contrato titulado "*Gestión del Centro de Atención a Personas Mayores Dependientes (Residencia Y Centro De Día) Peñuelas, de Madrid*".

De acuerdo con el artículo 194.2 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la penalidad se hará efectiva mediante la deducción de las cantidades que en concepto de certificaciones mensuales deban abonarse al contratista, o sobre la garantía que se haya constituido cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Fecha:

13 de junio de 2023

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (en funciones)
(P.D. Orden 1.558, de 28 de septiembre, BOCM nº 239, de 7/10/2021)
EL VICECONSEJERO DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Firmado digitalmente por: MARTINEZ-SICLUNA SEPULVEDA LUIS